

Examinada su solicitud de informe, remitida a este Gabinete Jurídico, referente al Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero por el que se Regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia, solicitado de esta Agencia Española de Protección de Datos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 h) de la Ley Orgánica, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, y 5 b) del Estatuto de la Agencia, aprobado por Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo, cúmpleme informarle lo siguiente:

El texto ahora sometido a informe introduce determinadas modificaciones sobre el que ya fue informado por esta Agencia en fecha 13 de octubre de 2010.

De este modo, se establece un régimen más detallado del contenido general de los registros, en particular de lo establecido en la letra a) del artículo 8 del Real Decreto 95/2009, a fin de establecer un régimen más detallado de la información referida a las personas jurídicas y entidades sin personalidad. Al propio tiempo, se añaden como datos que se incorporarán al sistema en relación con las personas físicas los referidos al “número ordinal informático policial y número de atestado”.

Los artículos 9, 10, 16 y 17 son modificados igualmente en su rúbrica y contenido a fin de ajustar el texto legal a las modificaciones derivadas de la reforma operada en el Código Penal por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, que entrará en vigor el 23 de diciembre de 2010, que introduce un nuevo artículo 31 bis en dicho Código, relativo a la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Por último, el Proyecto modifica el artículo 18 del Real decreto 95/2009 en el sentido ya contenido en la redacción objeto de previo informe de esta Agencia, referida a la exigencia de que los documentos acreditativos de la personalidad del solicitante de la rectificación o cancelación se encontrasen en vigor, introduciendo además una norma referida al modo en que dichos derechos deberán ejercitarse en caso de que la información se refiera a personas jurídicas o entidades sin personalidad.

Tomando en cuenta lo que acaba de resumirse, debe reiterarse nuevamente lo ya indicado en el previo informe de esta Agencia en lo que respecta a la no aplicación de las normas contenidas en la Ley Orgánica 15/1999 a las personas jurídicas, al quedar las mismas excluidas del ámbito protector previsto en la misma, como corrobora el artículo 2.3 de su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.



De este modo, las únicas previsiones del Proyecto sometido a informe que afectarían a la aplicación de la Ley Orgánica 15/1999 serían las contenidas en la nueva redacción de los artículos 8 a) y 18.2 del Real Decreto 95/2009 establecida en el texto sometido a informe.

Respecto de la segunda de ellas, esta Agencia ya informó favorablemente la exigencia de que los documentos acreditativos de la identidad del solicitante de la rectificación o cancelación se encontrasen en vigor, indicando lo siguiente:

*“(...) la reforma planteada afecta al artículo 18 del Real Decreto 95/2009 en el sentido de aclarar que será necesario para la solicitud de la cancelación o rectificación de los datos contenidos en el sistema que los documentos aportados, tales como el documento nacional de identidad o el número de identificación de extranjero o tarjeta de identidad o pasaporte, en su caso, se encuentren en vigor.*

*En este sentido, la memoria justificativa aclara que la reforma procede de la recomendación efectuada por el Defensor del Pueblo en el expediente 07030853 y recuerda la normativa aplicable al Documento Nacional de Identidad y a la documentación de los extranjeros que se encuentren en territorio español y las previsiones referidas a la vinculación de la eficacia de dicha documentación a que aquélla se encuentre en vigor.*

*En este sentido, debe recordarse que el artículo 24.2 a) del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 dispone que los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se ejercitarán “por el afectado, acreditando su identidad, del modo previsto en el artículo siguiente”, añadiendo el artículo 25.1 a) que la comunicación dirigida por el afectado al responsable deberá contener “fotocopia de su documento nacional de identidad, o de su pasaporte u otro documento válido que lo identifique”.*

*Como puede comprobarse, el documento aportado deberá ser válido y, por consiguiente eficaz. De este modo, dado que las normas a las que se refiere la Memoria Justificativa hacen depender la eficacia y validez de los documentos aportados de su vigencia en el momento de su aportación, la modificación del artículo 18 contenida en la norma sometida a informe es plenamente congruente con las exigencias establecidas en la normativa reguladora de dichos documentos y en la propia normativa de protección de datos de carácter personal.”*

En consecuencia, en el presente informe únicamente debe analizarse como novedosa la referencia contenida en el último inciso de la nueva redacción del párrafo primero del artículo 8 a) del real Decreto, que prevé la



inclusión en el sistema de los datos relativos al “número ordinal informático policial y número de atestado”.

Se plantea en este caso si la inclusión de estos dos datos adicionales resultará conforme a los principios contenidos en la Ley Orgánica 15/1999 y particularmente al de proporcionalidad, previsto en su artículo 4.1, según el cual “los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido”.

La Memoria Justificativa del Proyecto sometido a informe se refiere a las causas que justifican la inclusión de estos datos adicionales, señalando que “la inclusión entre los datos identificativos de la personal del número informático policial y el número de atestado responde a la necesidad de garantizar la necesaria seguridad de las personas, fundamentalmente en el tratamiento de las requisitorias que preceptivamente, de acuerdo con el Art. 762 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal debe insertarse en el fichero automatizado correspondiente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Efectivamente, el Real decreto 95/2009 de 6 de febrero prevé en su artículo 6 el acceso a este registro el acceso a los registros de penados y medidas cautelares, requisitorias y sentencias no firmes los funcionarios autorizados de la policía judicial y resulta, particularmente en el caso de las requisitorias, para su mejor gestión y actualización permanente que los datos del registro puedan relacionarse con los resultantes de la información que ahora quiere añadirse al registro para una mejor calidad y sobre todo para evitar errores y ambigüedades que pueden generar consecuencias no deseadas”.

Sin perjuicio de que la redacción reproducida anteriormente pudiera resultar mejorable, de la misma se desprende, no obstante, que la finalidad que justifica el tratamiento de estos datos, consistente en su inclusión en los registros, es la de garantizar una adecuada identificación de los datos a los que pudieran acceder las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con aquella información que obre en sus propios sistemas de información, garantizando así la plena identidad de la misma, de modo que la ausencia de los datos que ahora se añaden no pueda suponer la adopción de medidas respecto de personas distintas a aquéllas a las que se refiere la información.

En este sentido, el artículo 4.3 de la Ley Orgánica 15/1999 dispone que “los datos de carácter personal serán exactos y puestos al día de forma que respondan con veracidad a la situación actual del afectado”. Este principio quedará garantizado, según se indica, mediante el mayor grado de identificación de la información contenida en el registro con la adición de los datos a los que se refiere la reforma que, en consecuencia, resultaría conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999.



En todo caso, debe ponerse de manifiesto que la información adicional procederá de las propias resoluciones judiciales en las que la misma se incorpore, dado que el único procedimiento de inclusión de datos en el Registro es el descrito en el artículo 12 del Real Decreto 95/2009, por lo que el hecho de que la información tenga un carácter esencialmente policial no afectará al hecho de que dicha información deba proceder de las mencionadas resoluciones.

A la vista de todo ello, se informa nuevamente en sentido favorable el Proyecto sometido al parecer de esta Agencia Española de Protección de Datos.